

Conflictividad agraria en Tlaxcala y la Sierra Norte de Puebla a finales del régimen posrevolucionario mexicano¹

Sergio Alejandro Pérez Muñoz²
Carlos Bustamante López³

Resumen

El documento tiene como propósito, a partir de bibliografía histórica y sociológica elaborada para Tlaxcala y la Sierra Norte de Puebla, examinar de manera articulada los procesos conflictivos que tuvieron lugar en ambos casos, durante la segunda mitad de la década de 1960 y en los primeros años de la década de 1970; años en que el modelo de desarrollo para el campo mexicano entraba en franco debilitamiento. Las relaciones sociopolíticas y productivas que acaecieron para el caso tlaxcalteca y la Sierra Norte de Puebla, entendidas como unidades regionales históricas, han sido analizadas en el periodo citado de forma independiente, por lo que, dada su contigüidad espacial, es necesario vincularlas siguiendo los problemas que el campesinado tuvo frente a las oligarquías agrarias, así como el papel de un Estado que, ya en un periodo posrevolucionario, dejó de promover abiertamente el reparto agrario.

Palabras clave: conflicto, sociedad agraria, oligarquía, Estado.

Agrarian conflict in Tlaxcala and the Sierra North of Puebla at the end of the regime Mexican post-revolutionary

¹ El artículo es resultado de la movilidad académica que, entre septiembre y diciembre del 2020, el Mtro. Sergio Alejandro Pérez Muñoz realizó en el Seminario de Desarrollo Regional y Urbano de la Maestría en Análisis Regional, bajo la tutoría del Dr. Carlos Bustamante.

² Egresado del Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo: segioalejandrol411@hotmail.com

³ Profesor-investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, miembro del Seminario de Desarrollo Regional y Urbano de la Maestría en Análisis Regional. Correo: carlos.bustamante@uatx.mx

Abstract

The purpose of the document is, based on the historical and sociological bibliography prepared for Tlaxcala and the Sierra Norte de Puebla, to examine in an articulated way the conflictive processes that took place in both cases, during the second half of the 1960s and in the first years of the 1970s; years in which the development model for the Mexican countryside was clearly weakening. The sociopolitical and productive relations that occurred in the case of Tlaxcala and the Sierra Norte de Puebla, understood as historical regional units, have been analyzed in the aforementioned period independently, therefore, given their spatial contiguity, it is necessary to link them following the problems that the peasantry had against the agrarian oligarchies, as well as the role of a state that, already in a post-revolutionary period, stopped openly promoting agrarian distribution.

Keywords: conflict, agrarian society, oligarchy, state.

Introducción

En el presente ensayo se aborda la problemática agraria vivida en el estado de Tlaxcala y la región de la Sierra Norte de Puebla en el curso del agotamiento del modelo de desarrollo rural del Estado posrevolucionario mexicano, entre mediados de las décadas de 1960 y 1970. Ambos espacios presentan puntos relevantes en este proceso como para la realización de una lectura conjunta, en tanto que se tratan de espacios colindantes, en los que los conflictos agrarios que cundieron en la década de 1970 partieron de problemáticas compartidas de los campesinos tlaxcaltecos y poblanos, y de un proceso de organización articulada de los mismos, pero en los que las luchas de sus sectores rurales empobrecidos, por las razones que se explicarán, se separaron de dicha organización articulada y se plantearon como enfrentamientos directos contra las oligarquías agrarias de su entorno inmediato.

El estado de Tlaxcala como la Sierra Norte de Puebla son formaciones regionales históricas, es decir, ensamblajes peculiares de fuerzas sociales que pugnan por los recursos de sus territorios, en el marco de los límites institucionales que se encuentran al interior de sus confines, y que entran en relación con las dinámicas de otras formaciones sociales a partir de dicho ensamblaje (Saquet, 2015: 34). Esto es evidente en el caso de Tlaxcala, con una larga data en la construcción de su entidad política, económica y sociocultural, respecto de la cual su definición como estado soberano es una confirmación (Rendón, 1996), pero es igualmente cierto en el caso de la Sierra Norte de Puebla, en tanto que, los 67 municipios ubicados en las serranías al norte del estado de

Puebla, colindantes con los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz (mapa 1), se erigieron en una región diferenciada desde finales del siglo XIX, cuando su territorio se convirtió en el eje geopolítico más importante para los movimientos político-militares que se disputaban en ese tiempo el control del centro de México (Thomson, 2010; Thomson y LaFrance, 2011).

En tal sentido, el texto que sigue observa en ambas formaciones regionales la coyuntura crítica de la sociedad agraria que estalló en el ocaso del orden posrevolucionario mexicano, a través de enfocar la principal pugna de clases que existía en la sociedad rural de ambos entornos, entre una oligarquía terrateniente y los pobladores rurales campesinos o sin tierra. Esta era la pugna que determinaba la situación del campo mexicano en el periodo que se aborda (Rubio, 2001 y 2006; Otero, 2004; Bartra, 1985), en tanto que el principal eje de las problemáticas rurales era la confrontación entre diversas oligarquías regionales y las clases campesinas; la cual tenía como materia de conflicto la distribución de la tierra, a cargo del Estado mexicano a partir de su política agraria, el control de los precios del mercado interno y la capacidad organizativa y de intermediación con el Estado.

Para la realización del ensayo se llevó a cabo en una revisión bibliográfica y de comparación de casos, enfocándose en literatura histórica y sociológica desarrollada con posterioridad a los momentos álgidos de los conflictos agrarios serranos y tlaxcaltecas, que abarcó analíticamente las siguientes dimensiones: el antagonismo de clases existente en el campo de Tlaxcala y de la Sierra Norte en la época analizada; la progresiva organización campesina que se dio en ambas formaciones regionales para hacer frente al dominio de las oligarquías rurales desde inicios de la década de 1960; el desarrollo de las movilizaciones enfocadas en la distribución de la tierra tanto en Tlaxcala como en la Sierra Norte en la década de 1970, y los saldos de tales movilizaciones. De esta manera, a lo que se dedica en lo subsecuente el trabajo es a la exposición narrativa sobre las dimensiones comentadas, a efecto de resaltar la unidad que tuvo la conflictividad agraria serrana y tlaxcalteca desatada por el agotamiento del régimen agrario de la posrevolución, así como las circunstancias que desarticularon tal unidad. El carácter conjunto de las problemáticas agrarias serranas y tlaxcaltecas de la época estudiada, si bien es deducible de la revisión bibliográfica, no fue resaltado por los trabajos desarrollados para abordar tales problemáticas, pues éstos se mantuvieron en los confines determinados por los límites estatales; por lo que el presente documento intenta llenar esa brecha y, además, promover la superación de visiones solamente estatales en el estudio de las sociedades rurales poblanas y tlaxcaltecas.

Inicio común de las luchas por la tierra en los estados de Puebla y Tlaxcala

Durante la década de 1960, tanto en Tlaxcala como en Puebla, los habitantes subalternos de zonas rurales, es decir, los campesinos de infrasubsistencia y los pobladores rurales sin tierra (Modonesi, 2012; Rappo, 1986), enfrentaban un núcleo común de problemáticas que ponían en riesgo su reproducción social en sus contextos de origen y en las condiciones productivas agrícolas que habían desarrollado a través de la socialización histórica de dichos contextos. Estas problemáticas se concentraban en la desigual distribución de los recursos agrarios en ambos estados, derivada de la práctica congelación del reparto agrario en Tlaxcala y en Puebla a partir de la década de 1940 (Ramírez, 1988 y 1990; Pansters, 1998; Rappo, 1986), y en el dominio sobre el campo de dichas entidades ejercido por oligarquías agrarias con fuertes incentivos para mantener en la exclusión a los habitantes rurales campesinos y sin tierra, pues las actividades a las cuales se dedicaban dichas oligarquías, ganadería y cultivos comerciales con sistemas de baja productividad, las condicionaban a sostener extensiones de tierra exageradas para la agricultura y ganadería modernizadas y no les impulsaban al desarrollo de un mercado de trabajo rural (Ramírez, 1990; Ramos y Magnon, 1984).

Ambas situaciones eran propias del bajo desarrollo que presentaban las zonas mexicanas de agricultura campesina (Sánchez, 1976; Díaz, 1977: 1437-1438), producto de la persistente desigualdad entre las unidades de producción con amplias extensiones de tierra, financiamiento y capacidad de comercialización, y las unidades de producción minifundistas, la cual había sido fuertemente precipitada por el modelo económico posrevolucionario e implosionó durante la década de 1960, generando una crisis agroalimentaria nacional y diversas crisis políticas regionales (Bartra, 1985; Saavedra y Rello, 2007: 25-27).

En Puebla y en Tlaxcala, desde principios de la década de 1960, se desplegó un proceso de organización de los habitantes rurales subalternos, el cual tenía el objetivo de formular reivindicaciones de acceso a la tierra y enfrentar la exclusión y la explotación que ejercían las oligarquías agrarias regionales, por fuera de la cooptación que existía respecto de los procesos de agremiación de las masas en el campo mexicano a partir de las centrales del Partido Revolucionario Institucional (Ortiz, 1978).

Este proceso de organización tuvo su inicio en la formación de agrupaciones campesinas locales y de escala estatal, pero rápidamente dio lugar

a la participación de los campesinos poblanos y tlaxcaltecas en procesos de organización rural autonomista de escala nacional, con los trabajos desarrollados por colectivos campesinos para la fundación de la Central Campesina Independiente (CCI) que se realizaron entre los años de 1962 y 1963 (Ortiz, 1978; Cruz, 2018: 31-41).

La fundación de dicha Central se desarrolló a partir de una convocatoria realizada en el estado de Morelos en abril de 1962, por 100 mil campesinos de distintas partes del país, incluidos los estados de Puebla y Tlaxcala. A partir de esa convocatoria se pactó la realización de un Congreso Nacional Independiente para la creación de una Central Campesina autónoma de los distintos organismos centrales y partidistas que se habían arrogado la representación campesina hasta el momento (Ortiz, 1978: 114-117).

En los preparativos para el Congreso fundacional de la CCI se estableció un programa de trabajo para la Central naciente, consistente en los siguientes puntos: impulsar la organización de los trabajadores agrícolas; hacer efectivo el financiamiento de los productores campesinos; crear un sistema de aseguramiento para su producción, y luchar contra los monopolios y contra la represión y la intervención del ejército en conflictos agrarios (Ortiz, 1978: 114-117). Asimismo, se definieron como sectores de base para la Central a los solicitantes de tierra, a ejidatarios y comuneros, a auténticos pequeños propietarios y a jornaleros, y se hicieron llamados a organizaciones populares aliadas: obreras, magisteriales, estudiantiles y femeniles (Ortiz, 1978: 114-117).

La convocatoria al congreso fue firmada por representantes de organizaciones campesinas de todo el territorio nacional. Las entidades de Puebla y Tlaxcala participaron en esta convocatoria, particularmente, a través de la Federación Revolucionaria Campesina del Estado de Puebla, el Partido Comunista Mexicano en su sección de Puebla-Tlaxcala; además de que en la Comisión Organizadora del Congreso se encontraba Ramón Danzós Palomino, importante dirigente campesino que había trabajado y trabajaría posteriormente en colaboración con los cuadros campesinos de ambos estados (Ortiz, 1978: 114-117; Colmenero, 1975: 21; Trevizo, D., 2002).

La CCI sufrió una escisión a nivel nacional desde el principio de su existencia, entre un sector que aceptó una coalición con el PRI para acceder a cargos políticos y un sector que intentó sostener la autonomía de la organización. Estos dos sectores eran identificados como la CCI-Institucional de Garzón, el primero, y la CCI-Independiente de Danzós Palomino, el segundo, por los liderazgos que los representaban (Ortiz, 1978: 120; Cruz, 2018: 38-41).

El sector que comenzó a operar en los estados de Puebla y Tlaxcala en este periodo era justo el de Danzós Palomino, que ostentaba un programa de organización campesina en contra de la cooptación estatal del movimiento campesino, con manifiesto apoyo a la lucha por la tierra y que fungía como brazo rural del Partido Comunista, con una larga presencia, al menos en el estado de Puebla, desarrollando organización política en las zonas rurales (Pérez, 1991: 34).

En el primer año de su existencia, 1963, en Tlaxcala y Puebla, la CCI comenzó brindando apoyo a movilizaciones locales o a iniciativas de solicitudes de dotación de tierras, particularmente en el centro de la entidad poblana, en el esfuerzo de ampliar sus bases y acrecentar la organización en la entidad (Pérez, 1991: 38 y 39). Pero rápidamente esta Central tuvo oportunidad de consolidar su papel como actor político en ambos estados, al participar en las movilizaciones que se generaron en contra de las disposiciones gubernamentales del estado de Puebla de 1964, las cuales impulsaban un monopolio en el comercio de leche, al establecer la obligatoriedad de la pasteurización del lácteo que se vendía, principalmente en la capital poblana, en plantas de pasteurización propiedad de potentados ganaderos de la entidad (Pérez, 1991: 38 y 39).

Tales decisiones afectaban a los pequeños productores de leche, ejidatarios y pequeños propietarios, tanto de Puebla como de Tlaxcala, especialmente de las zonas más cercanas a la actual zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, quienes tendrían que pagar precios de monopolio por la pasteurización de su producto a efecto de poderlo vender, por lo que se movilizaron unificadamente contra las medidas monopolizadoras del gobierno de Puebla (Tiempo Universitario, 2002). Los productores lecheros establecieron comunicación con activistas universitarios para resistir a los intentos de monopolización; estos activistas los vincularon con la CCI para que los asesora, a partir de lo cual, los productores crearon la Unión Regional de Pequeños Productores de Leche de los Estados de Puebla y Tlaxcala, que quedó afiliada a la CCI (Pérez, 1991: 40; Tiempo Universitario, 2002).

Entre los apoyos que en un inicio la CCI brindó al movimiento de los pequeños productores de leche, se encuentran el diseño de una cooperativa que desarrollaría las labores de pasteurización para evitar que ésta fuera monopolizada por agroindustriales del estado de Puebla, así como la realización de movilizaciones. La cooperativa fue rechazada de cualquier tipo de financiamiento de la banca de pública de fomento y las movilizaciones fueron reprimidas y culminaron en la aprehensión de los líderes de la CCI, particularmente

de Danzós Palomino, encausados por delitos de sedición, asociación delictuosa y apología del delito (Pérez, 1991: 40 y 41; Tiempo Universitario, 2002).

Esta respuesta represiva resultó contraproducente, pues atizó una amplia organización en Puebla de diversos sectores en apoyo a los productores lecheros. A finales de 1964, se desarrollaron en Puebla movilizaciones encabezadas por el Partido Comunista, la Universidad Autónoma de Puebla, y la Central Campesina Independiente, que extendieron el movimiento desde las impugnaciones específicas de los pequeños productores lecheros de Puebla y Tlaxcala, hasta demandas de sectores urbanos populares, que enfrentaban los incrementos de impuestos o expropiaciones forzosas que el gobierno de Puebla realizaba para crear parques industriales. Tales movilizaciones culminaron en una fuerte desestabilización y ataques policiales graves a los participantes, lo que empujó a la renuncia del gobernador poblano de dicho periodo y sobrevino en el desistimiento de las disposiciones gubernamentales que tendían a la monopolización del mercado lechero en el estado (Pérez, 1991: 43).

La CCI, con esta participación en la lucha popular se consolidó como la organización campesina alternativa al gremialismo oficial en Puebla (Pérez, 1991: 44) y, por supuesto, extendió su consolidación al ámbito de la población rural subalterna de Tlaxcala, al haber sido un eje fundamental de la defensa de los productores lecheros de ese estado que se movilizaron junto con los de Puebla.

Conflictos por la tierra en Tlaxcala a mediados de las décadas de 1960 y 1970

Contexto general

En Tlaxcala la segunda mitad de la década de 1960 está marcada por el despliegue de un conjunto de reivindicaciones campesinas que tenían el objetivo de obtener redistribuciones de tierra, ante la marginación que los pobladores rurales subalternos padecían respecto de los recursos agrarios fundamentales (tierra, agua, financiamiento), los cuales se encontraban concentrados en las manos de la oligarquía rural del estado (Ramírez, 1988 y 1990). Esta aguda polarización del campo tlaxcalteca, que resultaba ya asfixiante para los pobladores rurales subalternos en la década de los sesenta, se había configurado a través de los cambios y continuidades a que había dado lugar la Revolución Mexicana en Tlaxcala (Buve, 1989).

A decir de Buve (1989: 196, 200 y 228-233), la Revolución sacudió la estructura agraria del estado, pero la élite latifundista, ubicada a principios

del siglo XX fundamentalmente en los distritos de Morelos y Juárez (norte de Tlaxcala), pudo resistirla y mantenerse en los años posteriores, debido a que sus integrantes no fueron los propietarios agrícolas que más sufrieron los estragos del agrarismo revolucionario; los que más los padecieron fueron los terratenientes ubicados en el centro-sur de Tlaxcala, donde se concentraban dos terceras partes de la población de esos años y eran los entornos de mayor efervescencia agrarista.

En la década de 1910, en el del centro-sur del estado de Tlaxcala, particularmente en la cuenca del Atoyac-Zahuapan, existían hacendados con propiedades extensas (aunque no mayores a las de los hacendados del norte del estado, de más de 1000 hectáreas), los cuales desarrollaban una agricultura empresarial intensiva y se encontraban en medio de pueblos propietarios de minifundios, de cuya oferta de fuerza de trabajo dependían y con los cuales competían por los recursos agrarios; lo que los diferenciaba de los latifundistas tlaxcaltecas norteños de la época, más aislados de pueblos campesinos propietarios y con una fuerza de trabajo acasillada (Buve, 1989: 196, 200 y 228-233).

Su vinculación con pueblos campesinos minifundistas hizo de los propietarios del centro-sur del estado presa de las reivindicaciones agraristas y de repartos de tierra efectuados por las distintas facciones revolucionarias que se desarrollaron en Tlaxcala en la década de 1910. Al disminuir la violencia armada y recuperarse cierto orden político y flujo comercial después de la Revolución, los hacendados del centro-sur no fueron capaces de recuperar el control de sus fincas ni relanzar sus explotaciones con sus propios recursos, y tampoco recibieron apoyo de los gobiernos tlaxcaltecas sucedáneos relativamente agraristas, por lo que en este trance fueron prácticamente barridos del campo tlaxcalteca y dejaron libre el camino al dominio de la élite latifundista norteña, articulada con una nueva clase política estatal derivada, principalmente, de la facción revolucionaria constitucionalista de Tlaxcala (Buve, 1989: 196, 200 y 228-233).

Las condiciones que permitieron a la élite latifundista del norte del estado soportar el vendaval revolucionario (propiedades extensas, aislamiento de pueblos solicitantes de tierra, baja dependencia de fuerza de trabajo jornalera), la habilitaron para recuperar sus explotaciones, basadas en el cultivo comercial de maguey, maíz, cebada y en la ganadería, una vez restablecido cierto orden en Tlaxcala al finalizar la etapa armada de la Revolución (Buve, 1989: 196, 200 y 228-233). Sin embargo, al quedarse como la élite potentada rural en la entidad, la oligarquía rural norteña no estuvo exenta de las presiones

agraristas de la posrevolución, sino que sus miembros tuvieron que desarrollar múltiples estrategias para proteger sus propiedades frente a las dotaciones de tierra a campesinos, particularmente frente a las dotaciones cardenistas de la década de 1930.

Estas estrategias involucraron, para los latifundistas tlaxcaltecas, en primer lugar, el desarrollo de su propio reparto de tierras, es decir, la realización de transferencias a familiares o a testaferros de diversas porciones de sus latifundios menores a los límites legales para la pequeña propiedad, tanto por vía de herencia o compraventa, a fin de mantener cohesionado el patrimonio del grupo familiar potentado; y, en segundo lugar, la obtención de certificados de inafectabilidad, que eran instrumentos que existieron desde el gobierno de Elías Calles (1924-1928) para proteger del reparto agrario a las propiedades que no excedieran de los límites legales a la pequeña propiedad y que se mantuvieran en explotación (Ramírez, 1988: 213).

En general, a raíz del reparto agrario del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), los certificados protegían terrenos dedicados a la agricultura de no más de 100 hectáreas en explotación y terrenos dedicados a la ganadería que no excedieran de las hectáreas necesarias para sostener a 500 cabezas de ganado mayor (García, 2014). Por tal razón, para los terratenientes de Tlaxcala, que padecieron en el reparto cardenista las mayores afectaciones, resultó fundamental obtener certificados de inafectabilidad ganadera, actividad en la cual se concentraron, pues eran los que más hectáreas les permitían mantener, además de que daban lugar a ambigüedad en la regulación estricta de los límites.

A los hacendados tlaxcaltecas, los certificados obtenidos para protegerse del reparto agrario cardenista, así como de posibles repartos en los dos sexenios posteriores al de cárdenas, les valieron obtener una protección por 25 años de sus extensas propiedades, que era el periodo de vigencia que tenían dichos certificados, tiempo en el que también pudieron desarrollar transferencias de porciones de sus terrenos para acomodarse a los límites de la pequeña propiedad cuando se venciera la vigencia de sus certificados (Ramírez, 1988: 213).

A juicio de Romano, Jiménez y Romero (2007: 115), estas estrategias dieron lugar a que en Tlaxcala, en la década de 1960, ya se observara un recambio, desde una economía agrícola basada en grandes fincas hacia una economía dominada por ranchos agrícolas más fragmentados (que no desplazó del todo al latifundismo pero sí se volvió más relevante), lo que también renovó la situación de la clase dominante tlaxcalteca, de hacendados latifundistas

a rancheros, los cuales pasaron a controlar instituciones de poder político y también mercados tradicionales, como el del pulque, o nuevos mercados que iban generándose, particularmente en el sector de servicios.

Este recambio, por supuesto, significaba que la fragmentación de la tierra que se desarrolló en el estado entre las década de 1920 a 1960 había logrado relanzar el monopolio agrario de los grupos familiares terratenientes del norte de Tlaxcala, que se erigieron en la oligarquía rural estatal, adaptándolo a las nuevas condiciones del régimen económico político mexicano, con lo que la población subalterna rural se mantenía confinada a los minifundios que subsistieron o que lograron ser repartidos hasta los sesenta (Ramírez, 1988).

Despliegue de las luchas por la tierra en Tlaxcala

Para los campesinos tlaxcaltecas, en la década de los sesenta se hallaban cerradas las alternativas de superar este confinamiento, en tanto que el reparto agrario en la entidad llevaba unos 20 años agotado, en los cuales solo se habían desarrollado dotaciones de tierra de forma excepcional. Entre los años de 1915 y 1934 se repartió 38% del total de tierras que se repartirían en toda la reforma agraria, y entre 1934 y 1940 se repartió 43%. Es decir, 81% de las tierras repartidas en Tlaxcala se otorgaron a los campesinos tlaxcaltecas entre 1915 y 1940. De 1941 a 1985 se repartió solamente 19 % de las tierras que en todo el siglo XX se entregaron a los campesinos del estado (Ramírez, 1990: 109 y 110). Sin embargo, a mediados de la década de 1960, una organización campesina tlaxcalteca creciente, que como se comentó había participado de la lucha popular en Puebla en 1964, comenzó a desarrollar movilizaciones, atizadas por la noticia, expuesta en la prensa estatal, de la culminación de vigencia de la mayoría de los certificados de inafectabilidad ganadera que ostentaba la oligarquía rural tlaxcalteca. Así, en 1965, esta movilización tomó la forma de invasiones de predios y se tornó intensa, con 27 tomas de tierras registradas en el estado. Esta forma de movilización campesina se mantuvo a partir de este año, con reflujos, hasta rozar su mayor intensidad a principios de la década de 1970 (Ramírez, 1988: 214 y 1990: 226).

En 1971 la Federación de Estudiantes Tlaxcaltecas denunció en una gira del presidente Luis Echeverría la existencia de una élite rural en el estado integrada por 73 familias con propiedades que constituían latifundios simulados o que, abiertamente, tenían una extensión que excedía los límites a la propiedad rústica que existían en la época (Ramírez, 1990: 226-229). En

la denuncia de esta organización se identificaba a políticos que habían sido gobernadores desde la década de los treinta (Adrián Vázquez, Isidro Candía, Rafael Ávila y Felipe Mazarraza) y a un político que se perfilaba para gobernar la entidad (Emilio Sánchez Piedras), cuyas familias estaban vinculadas con la propiedad de 18 grandes haciendas; además de las 15 familias nucleares de la oligarquía rural de Tlaxcala, que tenían en su poder 43 haciendas ganaderas y cerealeras, cuyos intereses se extendían tanto al estado de Tlaxcala como al de Puebla, con los Reyes Huerta, los Haro o los Tamariz (Ramírez, 1990: 226-229). La Federación pretendía con esta denuncia que el gobierno revisara la legalidad de las extensiones de dichas haciendas, a efecto de que realizara afectaciones para entregar dotaciones ejidales a los campesinos o habitantes rurales pobres sin tierra, quienes ya presionaban estos predios con una efervescente actividad invasiva.

El Departamento de Asuntos Agrarios intentó atajar este problema y contener la efervescencia política en Tlaxcala, a través de establecer a mediados de 1971 un programa con brigadas dedicadas a medir propiedades denunciadas como latifundios y brindar la expectativa de un reparto de tierra de las mismas. No obstante, al no concretarse ninguna solución en dicho año, en 1972 los pobladores rurales tlaxcaltecas comenzaron a desarrollar un proceso de movilización amplio, organizados alrededor de la Central Campesina Independiente, en su sección de Puebla-Tlaxcala liderada por Danzós Palomino, la Unión de Campesinos y Estudiantes de Tlaxcala, así como con el apoyo de organizaciones estudiantiles de Puebla y la Ciudad de México (Ramírez, 1990: 227-233).

Es justo en este momento que pudo observarse una creciente articulación entre las luchas campesinas de Puebla y Tlaxcala, al menos en los siguientes puntos: a) en ambos estados la lucha agraria que ya se desplegaba partió del mismo proceso de organización; b) tanto en Puebla como en Tlaxcala se emprendieron movilizaciones que tenían estrategias análogas e incluso conjuntas de carácter radical: el desarrollo de tomas de tierras que el gobierno no iba a repartir debido a los enlaces que los grupos políticos dominantes tenían con los potentados agrarios o por la imposibilidad que el propio gobierno tenía de realizar repartos ante la fragmentación de los latifundios entre familias propietarias; y c) el panorama de vinculación hacia el exterior que tenían los pobladores rurales en lucha en ambas entidades tenía puntos en común, pues las organizaciones estudiantiles fungían como ejes de encuentro de los movimientos agraristas con organizaciones de distintos sectores de la sociedad y de distintos estados.

No obstante, lo anterior, en una caravana a la Ciudad de México organizada en abril de 1972, que movilizó a un contingente amplio para reclamar justicia para las demandas de tierra de los campesinos tlaxcaltecas, el Departamento de Asuntos Agrarios logró gestionar con una sección mayoritaria de la movilización la realización de un diálogo directamente con el presidente de la República, para atender una solución de fondo a la problemática tlaxcalteca. Una sección de la caravana, la encabezada por la CCI de Danzós Palomino, decidió no acudir a dicho diálogo y continuar con la protesta, sin embargo, fue detenida por el ejército (Ramírez, 1988: 227-230). Con tal estrategia, el gobierno federal logró desarticular la problemática campesina tlaxcalteca del movimiento campesino más amplio de los estados de Puebla y Tlaxcala, y excluyó de su ámbito de negociación a la Central Campesina Independiente de Danzós Palomino.

Pero el diálogo ofrecido por el gobierno, y algunas señales tendientes a la posible realización de un reparto de tierras que afectaría a los latifundios simuladamente fragmentados de la oligarquía tlaxcalteca, resultaron muy limitados para la problemática agraria del estado. Incluso el gobierno federal aceptó esas limitaciones, al plantear en el diálogo comentado que existían 80 000 campesinos sin tierras en Tlaxcala, que precisaban de 1 600 000 hectáreas, que no estaban disponibles en el estado (Ramírez, 1990: 235).

En 1972 el Departamento de Asuntos Agrarios intentó ejecutar repartos acotados de tierras entre campesinos, a través de comprar hectáreas a propietarios, que en general no se encontraban dentro de los latifundios denunciados como simulados; y en 1973 desarrolló algunas afectaciones a haciendas que sí se encontraban en una situación irregular respecto de los límites de sus extensiones; aunque estas acciones solo implicaron el reparto de 7 236 hectáreas, extensión en extremo acotada para los problemas de la entidad reconocidos por el gobierno (Ramírez, 1990: 237-239).

El problema no era solo de falta de voluntad del gobierno para realizar un reparto suficiente en Tlaxcala, sino que, además, efectivamente la oligarquía rural del estado tenía suficientemente fragmentadas la mayor parte de sus propiedades entre familiares y testaferros como para sortear los límites de hasta 200 hectáreas que en esa época se establecían para la pequeña propiedad agrícola en explotación, o como para solventar los más extensos y ambiguos límites que existían para la pequeña propiedad ganadera en explotación.

La fragmentación de latifundios era exacerbada en Tlaxcala a inicios de los setenta. Las haciendas más grandes del estado, con extensiones que rebasaban las 2 mil hectáreas, estaban ampliamente fraccionadas a su interior; solo una hacienda de éstas se hallaba registrada como un terreno no fraccionado en 1971 (tabla 1).

Tabla 1. Mayores haciendas en Tlaxcala en 1971 con sus fracciones

Municipio	Hacienda	Extensión (has)	Fracciones
Huamantla	San Francisco Tecocac	3 011-87-00	8
Hueyotlipan	San Blas	2 087-18-96	12
Lázaro Cárdenas	Zoquiapan	2525-00-00	15
Terrenate	La Laguna	2421-78-08	1
Terrenate	Piedras Negras	2 535-14-17	20
Tlaxco	Mazaquiahuac	2 998-00-00	6
Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	2 826-00-00	20
Tlaxco	San Miguel Mimiahuapan	3 045-64-18	19

Fuente: Ramírez, 1988: 22 y 23.

La estrategia de fragmentación de latifundios de la oligarquía rural tlaxcalteca, en efecto, se había desplegado desde la década de 1930 y se había consolidado en 1970, pues el crecimiento entre esos años de las pequeñas y medianas propiedades en el estado rebasó el 100% (Ramírez, 1988: 217).

La limitada respuesta a la problemática agraria tlaxcalteca por parte del gobierno federal tuvo el resultado de enardecer la lucha por la tierra. En 1971 no se registraron tomas de tierras, pero en 1972 se desarrollaron 19 invasiones de haciendas y en 1973 ocurrieron 10 por parte del movimiento campesino tlaxcalteca; la mayoría de estas invasiones se desarrolló en los municipios de Huamantla, Tlaxco y Benito Juárez (mapa 1), que concentraron la mitad de las movilizaciones invasivas campesinas de esos dos años (Ramírez, 1988: 230, 231 y 232).

Sin embargo, en este momento el movimiento campesino tlaxcalteca se encontraba bastante más aislado; la principal organización que articulaba el movimiento en la entidad en ese periodo era la Unión de Campesinos y Estudiantes de Tlaxcala, y la Central Campesina Independiente había quedado desvinculada de la lucha tlaxcalteca, tanto por la hábil división del movimiento campesino de Puebla y Tlaxcala que había provocado el gobierno federal, como por un reflujo en la organización y movilización que había sufrido esta Central en los primeros años de la década de 1970, que la había desmembrado y la había hecho replegarse y dejar de aglutinar las luchas campesinas de ambos estados (Trevizo, 2002: 292; Pérez, 1991: 60 y 61).

Las incursiones a los predios de la oligarquía agraria tlaxcalteca provocaron una fuerte presión de ésta al gobierno federal y estatal, impulsada desde

Según Ramírez (1988: 232-234), esta presión oligárquica tuvo éxito, en tanto que en junio de 1973 se desarrolló una decidida represión del movimiento campesino tlaxcalteca implementada por el ejército y la policía estatal, con la cual fueron desalojados todos los predios que continuaban tomados por los campesinos. Desde este momento la lucha agrarista en Tlaxcala, si bien tuvo nuevos episodios, ya no pudo recuperar la organización e intensidad que tuvo en la segunda mitad de los sesenta y los primeros tres años de la década de 1970 (Ramírez, 1990: 244-254).

Conflictos por la tierra en la Sierra Norte de Puebla

Contexto general

En el periodo en que el conflicto agrario tlaxcalteca entraba en un reflujo, la región de la Sierra Norte de Puebla vivió el despliegue de luchas campesinas, las cuales habían irradiado desde la coyuntura vivida en el centro de Puebla a mediados de los sesenta, derivada del intento de monopolización del mercado lechero por parte del gobierno Estatal.

En esta región de Puebla, inmediatamente colindante con el estado de Tlaxcala, existió a finales de la década de 1960 una situación análoga a la tlaxcalteca en cuanto a las condiciones que padecía la población rural subalterna. Según Héctor Ramos y Catherine Magnon (1984: 41-43), había en la Sierra en este periodo un puñado de familias que dirigían la vida económica y política regional, en general a partir de controlar las principales explotaciones comerciales agropecuarias, ganadería y café, que eran los pilares de la economía serrana, y de la captura de las instituciones gubernamentales. Estas familias eran los Macip y los Lobato de Zacapoaxtla, los Bonilla de Huitzilán de Serdán, los Flores, los Mora y Ocotlán Vásquez de Cuetzalan, y los Romero y Gómez de Xochiapulco de Romero Rubio y (Ramos y Magnon, 1984: 41-43).

Las familias que integraban la oligarquía agraria regional representaban, en la década de 1970, solo 0.8% de la población regional, pero controlaban 34% de la tierra, en particular la tierra más productiva; sus ranchos tenían amplias extensiones, aunque estaban artificiosamente acomodados a los requerimientos legales de la pequeña propiedad (Ramos y Magnon, 1984: 41-43). Un rancho ganadero o cafetalero en la región podía tener una extensión de 100 a 600 hectáreas, pero se fragmentaba entre familiares y testaferros para hacerlo aparecer en los registros oficiales como múltiples pequeñas propiedades (Ramos y Magnon, 1984: 41-43; León y Canabal, 1987).

Además de la gran extensión de los terrenos que poseían los terratenientes regionales, se encontraban ellos en un proceso de confrontación abierta contra comunidades poseedoras de tierra y que llevaban años solicitando el reconocimiento legal de la misma a través de la constitución de ejidos o del reconocimiento de comunidades agrarias. Tal confrontación tenía el objeto de despojar de extensiones de tierra para anexarla a ranchos ganaderos o cafetaleros (Ramos y Magnon, 1984; León y Canabal, 1987).

Los campesinos serranos en su mayoría poseían predios en propiedad privada que no constituían una base sólida para el sustento familiar (Rappo, 1986). En la Sierra Norte de Puebla, el reparto agrario había sido muy escaso y se había limitado a la década de los años treinta, en la cual solamente se llegó a constituir un sector de propiedad social que no alcanzó más de 20% de la tierra de las unidades de producción agrícola, fragmentado también en minifundios de infrasubsistencia (Rappo, 1986: 43 y tabla 2), porcentaje inferior a la media nacional en la década de 1970, en que la propiedad comunal y ejidal constituía la mitad de la tierra rústica del país.

Tabla 2. Participación del sector ejidal por regiones del estado de Puebla en 1982

Zona socioeconómica	Superficie total Has.	Superficie Distribuida Has.	% Sector ejidal
I. Huauchinango	569680	118285.81	20.76
II. Teziutlán	271610	46134.9	16.99
III. Tepeaca	588100	288916.12	49.13
IV. Cholula	263400	128975.21	48.97
V. Puebla	52430	22795.92	43.48
VI. Izúcar de Matamoros	902180	347799.62	38.55
VII. Tehuacán	744490	418147.49	56.17
Total de la Entidad	3391890	1371052.08	40.42

Fuente: Rappo (1986: 48)

En consecuencia, la absoluta mayoría de los productores serranos, tanto propietarios privados como colectivos, era minifundista, con limitadas extensiones que rondaban solo 1 hectárea y con baja capacidad productiva, salvo los que se ubicaban en la zona serrana del declive del golfo colindante con Veracruz, de clima tropical y con mejores condiciones para la agricultura de autosustento y para el desarrollo de actividades comerciales por parte de los campesinos (Rappo, 1986; Masferrer, 2006: 138-167).

El trabajo por jornal en esta época en la región resultaba una válvula de escape para la deficiencia de recursos que tenía la población rural subalterna serrana (Ramos y Magnon, 1984; León y Canabal, 1987). No obstante, durante la década de 1960, el principal mercado por jornal al que acudían los habitantes sin tierra y los campesinos de infrasubsistencia de la Sierra, el de la caña de azúcar en Veracruz, entró en una crisis profunda, provocada por una fuerte caída de los precios internacionales del azúcar entre los años 1966 y 1968, periodo en el cual el kilo de azúcar perdió 76.5 % de su valor (Ramos y Magnon, 1984: 38 y 39).

Debido a lo anterior, la superficie sembrada de caña en el estado de Veracruz fue disminuyendo a finales de la década de 1960, de 220 543 hectáreas en 1966 a 194 381 hectáreas en 1972, y con ello también la demanda de jornaleros (Ramos y Magnon, 1984: 38 y 39; León y Canabal, 1987). La depresión prolongada en el cultivo de caña veracruzano generó un desempleo crónico en la Sierra Norte de Puebla: entre los años 1970 y 1975 pasaron de ser 15 mil trabajadores estacionales poblanos en el corte de caña a 7 mil (León y Canabal, 1987: 27 y 28).

Estas precarias condiciones del trabajo por jornal y de distribución de la tierra entre los campesinos serranos, determinaron que, a finales de la década de 1960, en la Sierra Norte de Puebla permeara el proceso abierto por la organización y movilización campesina del centro de Puebla y del estado Tlaxcala (León y Canabal, 1987; Ramos y Magnon, 1984), expuesto en los dos apartados anteriores.

Despliegue de las luchas por la tierra en la Sierra Norte de Puebla

En principio, en la Sierra Norte fue la Central Campesina Independiente la que articuló las reivindicaciones de los pobladores rurales serranos hacia finales de la década de 1960. La Central impulsó la organización de los campesinos de la Sierra alrededor de acciones puntuales, como el apoyo en la presión que ejercían algunos pueblos para la resolución de solicitudes de tierra que la Secretaría de la Reforma Agraria había desconocido por más de 20 años, o la resistencia frente al aumento del impuesto predial sobre los terrenos rústicos que habían establecido los ayuntamientos serranos en 1969, la cual aglutinó a 57 pueblos de la región y logró su cometido (León y Canabal, 1987: 28 y 29; Ramos y Magnon, 1984). Además, la CCI apoyó acciones puntuales fragmentarias de tomas de tierras en distintos puntos de la Sierra: en Tetela de Ocampo en 1970 y en Francisco Z. Mena y Libres en 1971 (Pérez, 1991: 72-74).

A pesar del acotamiento inicial de las reivindicaciones rurales serranas, la desigualdad en la distribución de la tierra y la pérdida de alternativas para los pobladores rurales subalternos de la región, impulsó movilizaciones cuya finalidad era plantear una lucha para expandir el acotado reparto agrario que se había desarrollado en la región; para tal objetivo, los liderazgos y los pueblos serranos que se habían ido conformando durante los primeros procesos de movilización a finales de los sesenta, adheridos a la CCI, comenzaron a promover estrategias de lucha más radicales en la región (León y Canabal, 1987; Ramos y Magnon, 1984; Martínez, 1991).

En este sentido, el proceso de repliegue que la CCI enfrentó a principios de la década de 1970 (Trevizo, 2002: 292; Pérez, 1991: 60 y 61), desesperó a los pueblos organizados de la Sierra Norte, que buscaron su adhesión a la formación de la Unión Campesina Independiente (UCI) en 1974, constituida en la Sierra Central de Veracruz como escisión de la CCI, debido al carácter acotado e institucional, que, a juicio de sus organizaciones fundadoras en Veracruz, había tomado esta última organización (Martínez, 1991: 125-128). Con esta adhesión, el movimiento serrano tomó un impulso radical que la CCI no había sido capaz de darle durante los primeros años de la década de 1970 y que, dada la situación exasperante en la que se encontraban los serranos, se había hecho urgente; sin embargo, la escisión también fue el inicio de un proceso de desarticulación en la Sierra Norte de la lucha campesina que se libraba en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala.

En el caso de la Sierra de Puebla, la UCI comenzó por aglutinar la lucha por la tierra en el municipio de Zacapoaxtla, en 1974, pero rápidamente se extendió y consiguió la adhesión de 12 000 campesinos y 160 comunidades de toda la región (Martínez, 1991: 125-128). Esta organización se concentró desde este periodo sin ambages en las invasiones de fincas. Estas invasiones se plantearon por los campesinos serranos sobre los siguientes tipos de terrenos: a) los que habían recibido resoluciones presidenciales favorables de dotación pero que los terratenientes habían desacatado por largo tiempo; b) los que se encontraban sujetos a solicitudes formales de tierra pero que llevaban largo tiempo sin ninguna resolución del gobierno federal; c) los terrenos cuyas solicitudes habían sido rechazadas luego de procesos de más de 20 años, d) y los terrenos despojados por terratenientes a comunidades campesinas legítimamente propietarias (Ramos y Magnon, 1984: 77-79).

El auge de estas tomas de tierras se activó en el año de 1976, con marchas campesinas que recorrieron la Sierra y se unieron a mítines del movimiento campesino veracruzano, así como con tomas de tierras en Zacapoaxtla que

afectaron la finca “San Isidro” de un propietario, Gustavo Macip, miembro de la principal familia oligarca local, y que se extendieron después, fragmentariamente, a distintos puntos de la Sierra (Ramos y Magnon, 1984: 77-79). Ello despertó la alerta de las presidencias municipales serranas, que crearon un frente común entre ellas y con la oligarquía regional contra la lucha campesina (Ramos y Magnon, 1984: 77-79).

Desde su origen, la lucha de la UCI enfrentó la ofensiva de guardias blancas de los oligarcas serranos, así como la difamación pública, efectuada principalmente por la iglesia católica regional (Ramos y Magnon, 1984: 81 y 93). Estas estrategias, en principio cohesionaron al movimiento, lo impulsaron a una organización más estricta, a la conformación de autodefensas para protegerse de las incursiones de guardias blancas y el ejército en las tierras tomadas, a la creación de redes con movimientos externos al estado de Puebla y con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en tanto que habían tomado distancia con el Partido Comunista Mexicano, por considerarlo acotado e institucional (Ramos y Magnon, 1984: 81 y 93). E incluso, a partir del enfrentamiento con la oligarquía regional y sus guardias, se intensificó la toma de terrenos (Martínez, 1991: 125-128), pues hacia 1977 las tomas de tierras eran generalizadas en el municipio de Zacapoaxtla, Xochitlán de Romero Rubio y Huitzilán (Ramos y Magnon, 1984: 81 y 82; véase mapa 1). Y aunque fragmentariamente, en ese año se extendieron las invasiones a toda la Sierra, y también se agudizaron en el centro-norte del estado, con un nuevo despliegue de la CCI de Danzós Palomino que efectuó 70 tomas de predios (Ramos y Magnon, 1984: 80-83).

Ante el peligro de una generalización de las tomas de tierras en el estado de Puebla y de una rearticulación del movimiento campesino, los gobiernos federal y estatal configuraron diversas ofensivas para desarticular el movimiento serrano, a través de generalizar la intervención del ejército y de distintas policías municipales (Ramos y Magnon, 1984: 79 y 80). Desde el auge de 1976 de las tomas de tierras el ejército intervino la Sierra de forma continua y ya directamente enfocada en proteger a la oligarquía agraria y en efectuar desalojos de las tierras tomadas (Ramos y Magnon, 1984: 79 y 80).

Además, el gobierno intentó aumentar el financiamiento en servicios públicos y en intervención productiva (con el desarrollo de programas articulados para intervenir la Sierra, mejorar la productividad y controlar desde el Estado la organización campesina), y romper el movimiento y cooptar a sus escisiones (Martínez, 1991: 133-137). En esta última estrategia la organización Antorcha Campesina, perteneciente ya en ese momento a la Central Nacional Campesina, fungió como instrumento de la división en la Unión

Campesina Independiente y posteriormente de la represión de los campesinos que se mantuvieron en lucha (Martínez, 1991: 125-128).

Se trató pues de una estrategia cabal de contra insurgencia, desarrollada desde el Estado, en sus distintas instancias, aliado con la oligarquía agraria regional, que no dio lugar a ninguna concesión. Esta contra insurgencia rozó el carácter de una ofensiva militar de baja intensidad, basada en el espionaje sostenido de la Dirección Federal de Seguridad de las actividades y miembros de la UCI, así como en una alianza entre el ejército y agentes que actuaban como para-militares, como las guardias blancas de los terratenientes regionales, armadas por ellos para desalojar tierras, y la organización de Antorcha Campesina, que desplegó estrategias de cooptación y división del movimiento, pero también de represión violenta (Archivos de la represión, S/F; Ramos y Magnon, 1984; Martínez, 1991: 125-128).

Esta ofensiva estatal-oligárquica, llevó a la UCI a aislarse, a perder redes de contactos y vinculación ante el peligro de la infiltración, a tomar una forma rígidamente jerárquica, lo que era normal ante la confrontación cuasi militar que enfrentaron. Héctor Ramos y Catherine Magnon (1984) explican, que el Estado mexicano pudo aislar a la lucha campesina en la Sierra Norte de Puebla, y desarrollar una feroz represión sin otorgar ninguna concesión, en parte, porque la organización serrana acabó por excluirse a sí misma de la lucha campesina más generalizada que se estaba dando en el país, al separarse de la Central Campesina Independiente, y al depender fundamentalmente de liderazgos estáticos, que al ser detenidos o al tener que pasar a la clandestinidad debido a las labores de espionaje que se desarrollaron sobre ellos por parte del ejército, paralizaron las acciones de la organización. La persecución sobre los liderazgos de la UCI, comentan el autor y la autora mencionados (Ramos y Magnon, 1984), también motivó suspicacias y diferencias al interior de la organización y con otras organizaciones campesinas y partidos, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que apoyaban la lucha campesina en otras regiones, las que acabaron en enfrentamientos que finalmente contuvieron el desarrollo de acciones de solidaridad con las luchas serranas desde otros puntos del país.

Obturada por la lógica de contra insurgencia que enfrentó y el aislamiento al que al final fue sometida, hacia 1982 la lucha por la tierra en la Sierra Norte no había logrado obtener reconocimiento oficial para ninguna de las extensiones tomadas y reivindicadas por los campesinos serranos. La Sierra continuaba siendo el territorio del estado de Puebla con el menor porcentaje de tierra bajo el régimen de propiedad social. Como se observa en la tabla 2, las dos zo-

nas socio-económicas que abarcaban la región de la Sierra Norte en la época, Huauchinango y Teziutlán, eran las que menor porcentaje de participación del sector ejidal tenían en todo el estado, situación que se había mantenido así desde la década de 1940 hasta inicios de los ochenta (Rappo, 1986).

La movilización se desgastó ante este panorama. A inicios de la década de 1980, aunque las tierras que aún tenían tomadas los campesinos se mantuvieron trabajadas de manera colectiva, continuaron los ataques de las guardias blancas y las quemadas de sembradíos por parte de éstas (Martínez, 1991: 124 y 128). En este periodo, en el municipio de Cuetzalan el gobierno estatal promovió un acuerdo con organizaciones para plantear una tregua de cuatro años después de los cuales las tierras tomadas fueran abandonadas, sin dejar abierta ninguna posibilidad de redistribución ante la ya firme clausura del agrarismo oficial (Martínez, 1991: 124 y 128). En este sentido, la lucha por la tierra que había tenido lugar en la Sierra Norte perdió por completo posibilidades de obtener reconocimientos institucionales.

Reflexiones finales

La comprensión conjunta de los conflictos agrarios que acaecieron en los estados de Puebla y Tlaxcala al final del modelo mexicano de desarrollo rural posrevolucionario, es todavía una tarea pendiente de las aproximaciones históricas a esta problemática. Aquí se ha tratado de aportar a dicha comprensión con el análisis de los hilos comunes que existieron entre las luchas agrarias de la Sierra Norte de Puebla y Tlaxcala, que muestran vínculos sugerentes entre ambos contextos en la forma en que se desplegaron dichas luchas.

Uno de ellos es la forma homogénea que tenían las estructuras agrarias de Tlaxcala y la Sierra Norte, que derivaban del mismo obturamiento del reparto agrario a partir de la década de 1940. Lo anterior asociado al carácter de las élites rurales posrevolucionarias serranas y tlaxcaltecas, consistentes en oligarquías ganaderas y de algunos cultivos comerciales de baja productividad, con fuertes incentivos para desarrollarse de forma extensiva, es decir, para que su actividad económica implicara el control de amplias extensiones de tierra; lo que las enfrentaba directamente con los campesinos pobres con bajo acceso a la tierra. Asimismo, los procesos de organización unificada, particularmente los de la Central Campesina Independiente, de los cuales derivó la rebelión de las poblaciones rurales subalternas de Tlaxcala y de la Sierra frente a su exclusión y explotación en la década de 1960. Si bien, por igual, la lucha política que enfrentaron los movimientos campesinos tlaxcaltecas y serranos

en la década de 1970, la cual los desarticuló del proceso de lucha que se venía unificando en los estados de Puebla y Tlaxcala, y contribuyó a su derrota.

Finalmente, es necesario resaltar que estos hilos comunes entre la conflictividad agraria de Tlaxcala y la Sierra Norte de Puebla de mediados de la década de 1960 y la década de 1970, promueven un punto de partida para estudiar esta problemática, y la crisis y terminación del régimen agrario mexicano de la posrevolución, tanto en el estado de Puebla como en Tlaxcala, como parte de un mismo proceso que está más allá de las fronteras político-administrativa, lo que abre el camino también para investigar de manera articulada las dinámicas de respuesta y de reconfiguración económico-política que desplegaron las clases dirigentes de ambos estados frente a sus crisis agrarias. Se trata, por un lado, del impulso a la industrialización secundaria que han compartido Puebla y Tlaxcala desde finales de la década de 1970, y como efecto de ella, la conurbanización rampante entre ambas entidades derivada de dicho impulso; la cual ha dejado sus espacios rurales pobres como entornos excluidos en el proyecto económico-político dominante Poblano-Tlaxcalteca.

Bibliografía

- ARCHIVOS de la Represión (S/F). “Unión de campesinos independientes en el estado de Puebla”. Disponible en: <https://biblioteca.archivosdelarepresion.org/item/27761#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-768%2C-184%2C6128%2C3840> [Accesado el 20 de abril de 2021]
- BARTRA, A. (1985). *Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México*. México, ERA.
- BUVE, R. (1989). “Agricultores, dominación política y estructura agraria en la Revolución mexicana: el caso de Tlaxcala (1910-1918)” en *Revista Mexicana de Sociología*. Volumen 50, número 2, UNAM, pp. 181-236.
- COLMENERO, S. (1975). “El Movimiento de Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente y Cárdenas” en *Estudios Políticos*. Volumen II, número 2, UNAM, pp. 11-28.
- CRUZ Cruz, L. (2018). *La acción pública de la Central Campesina Independiente (CCI), de la masculinización a la feminización*. Tesis de licenciatura en sociología. Universidad Autónoma del Estado de México.
- DÍAZ, E. (1977). “Notas sobre el significado y el alcance de la economía campesina en México” en *Comercio Exterior*. Volumen 27, número 12, México, diciembre, pp. 1429-1438, disponible en <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/403/4/RCE4.pdf> [Accesado el 01 de diciembre de 2020]

- GARCÍA Gómez, J. (2014), “El certificado de inafectabilidad agraria en la economía mexicana del siglo XX” en Rojas, L. y Deeds, Susana M. (coord.), *México a la luz de sus revoluciones*. Volumen 2, México, El Colegio de México, disponible en: <https://muse.jhu.edu/chapter/2571493> [Accesado el 27 de noviembre de 2020]
- INEGI (2019). *Marco geoestadístico*, septiembre 2019.
- LEÓN, A. y B. Canabal (1987). *Ganadería y granos básicos en la Sierra Norte de Puebla. Una lucha desigual*. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- MARTÍNEZ, E. (1991). *Organización de productores y movimiento campesino*. México, Siglo XXI.
- MASFERRER, H. (2006). *Cambio y continuidad entre los totonacos de la Sierra Norte de Puebla*. Tesis de Maestría en Antropología Social. México, Universidad Iberoamericana.
- MODONESI, M. (2012). *Subalternidad*. Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, Ciudad de México, disponible en: http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/497trabajo.pdf [Accesado el 14 de abril de 2020]
- ORTIZ Mendoza, A. (1978). “La CCI: historia de una lucha (antecedentes de la CIOAC)” en *Estudios Políticos*. Volumen 4, número 15, UNAM, julio-septiembre, pp. 109-124.
- OTERO, G. (2004). *¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural*. México, Universidad Autónoma de Zacatecas / Simon Fraser University / Miguel Ángel Porrúa.
- PANSTERS, W. (1998). *Política y poder en Puebla: formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista, 1937-1987*. México, Universidad Autónoma de Puebla / FCE.
- PÉREZ Avilés, R. (1991). *La Central Campesina Independiente y el movimiento campesino en Puebla; el caso de la región de Atlixco 1963 – 1975*, Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- RAMÍREZ Rancaño, M. (1988). “La oligarquía agraria de Tlaxcala en los años setenta” en *Revista Mexicana de Sociología*. Volumen 50, número 1, UNAM, pp. 213-241.
- RAMÍREZ Rancaño, M. (1990). *El Sistema de haciendas en Tlaxcala*. México, CONACULTA.
- RAMOS, H. y C. Magnon (1984). “El movimiento campesino en la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Central de Veracruz” en Héctor Ramos et al.,

- La lucha campesina en Veracruz, Puebla y Tlaxcala*. México, Ediciones Nueva Sociología.
- RAPPO, S. (1986). “Reparto agrario en Puebla” en *COA Órgano de difusión del centro de investigación de la escuela de economía*. Números 2 y 3, Universidad Autónoma de Puebla, junio-1986.
- RENDÓN, R. (1996). *Breve Historia de Tlaxcala*. El Colegio de México (Fideicomiso de historia de las Américas).
- ROMANO, R.; Jiménez, R. y O. Romero (2007). *Cacicazgo y Oligarquía en el Oriente de Tlaxcala*. México, UAT / El Colegio de Tlaxcala.
- RUBIO, B. (2001). *Explotados y Excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*. México, Plaza y Valdez Editores.
- RUBIO, B. (2006). “Territorio y globalización en México ¿Un nuevo paradigma rural?” en *Comercio Exterior*. Volumen 56, número 12, México, diciembre 2006, pp. 1047-1055.
- SAAVEDRA, F. y F. Rello (2007). *Implicaciones estructurales de la liberalización en la agricultura y el desarrollo rural. El caso de México*. México, FLACSO.
- SÁNCHEZ Burgos, G. (compiladora) (1976). *La Región Fundamental de Economía Campesina*. México, CIDE.
- SAQUET, M. (2015). *Por una geografía de las territorialidades y las temporalidades: Una concepción multidimensional orientada a la cooperación y el desarrollo territorial*. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata, En Memoria Académica, disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.268/pm.268.pdf> [Accesado el 07 de diciembre]
- THOMSON, G. (2010). *La Sierra de Puebla en la política mexicana del siglo XIX*. México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- THOMSON, G. y D. Lafrance (2011). *El liberalismo popular mexicano: Juan Francisco Lucas y la Sierra de Puebla, 1854-1917*. México, Educación y Cultura.
- TIEMPO Universitario (2002). “Ramón Danzós Palomino” en *Gaceta Tiempo Universitario*, año 5, número 10, 23 de mayo de 2002, disponible en: <https://archivohistorico.buap.mx/sites/default/files/Tiempo%20Universitario/2002/10/index.html> [Accesado el 05 de diciembre de 2020]
- TREVIZO, D. (2002). “Dispersed communist networks and grassroots leadership of peasant revolts in Mexico” en *Sociological Perspectives*. Volumen 45, número 3, Berkeley, pp. 285-315.